



Asamblea General

Distr. general
18 de septiembre de 1998
Español
Original: inglés

Quincuagésimo tercer período de sesiones
Tema 110 c) del programa
Cuestiones relativas a los derechos humanos:
situaciones relativas a los derechos humanos e
informes de Relatores y Representantes Especiales

Situación de los derechos humanos en Rwanda

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a los miembros de la Asamblea General, en cumplimiento de la decisión 1998/266, de 30 de julio de 1998, del Consejo Económico y Social, el informe del Representante Especial de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Rwanda.

Anexo

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Rwanda preparado por el Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con la decisión 1998/266 del Consejo Económico y Social, de 30 de julio de 1998

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1–2	3
II. Misiones del Representante Especial	3–11	3
III. Observaciones	12–64	4
A. Retirada de la Operación de Derechos Humanos en Rwanda	12–19	4
B. Funcionamiento efectivo de una comisión nacional independiente de derechos humanos	20–26	5
C. Las condiciones de seguridad en Rwanda y sus efectos sobre la situación de los derechos humanos	27–39	6
D. La situación del sistema judicial	40–49	7
E. La situación del sistema penitenciario	50–55	9
F. Factores económicos y sociales	56–64	9
IV. Conclusiones y recomendaciones	65–84	10

I. Mandato

1. Este informe se presenta en atención a la resolución 1998/69 de la Comisión de Derechos Humanos, en virtud de la cual la Comisión decidió prorrogar un año más el mandato del Representante Especial, Sr. Michel Moussalli, y le pidió que, de acuerdo con su mandato, presentara un informe a la Asamblea General en su quincuagésimo tercer período de sesiones. En el párrafo 30 de la resolución se estipula que el mandato del Representante Especial es formular recomendaciones sobre la manera de mejorar la situación de los derechos humanos en Rwanda, facilitar la creación y el funcionamiento efectivo de una comisión nacional independiente de derechos humanos en Rwanda y formular también recomendaciones sobre situaciones en las que tal vez convendría prestar al Gobierno de Rwanda asistencia técnica en materia de derechos humanos. Asimismo, cabe hacer mención del párrafo 28 de la misma resolución, en el que la Comisión pide que se celebren consultas estrechas entre el Representante Especial y el Gobierno de Rwanda sobre el funcionamiento de la futura comisión nacional de derechos humanos.

2. El Consejo Económico y Social tomó nota de la resolución mediante su decisión 1998/266, por la que prorrogó un año más el mandato del Representante Especial.

II. Misiones del Representante Especial

3. Tras su nombramiento en junio de 1997, el Sr. Moussalli, Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos, presentó sus primeros informes sobre la situación de los derechos humanos en Rwanda, a la Asamblea General durante su quincuagésimo segundo período de sesiones (A/52/522, de 22 de octubre de 1997), y a la Comisión de Derechos Humanos en su 54° período de sesiones (E/CN.4/1998/60, de 19 de febrero de 1998).

4. A fin de desempeñar las funciones correspondientes a su mandato prorrogado y ampliar sus observaciones y recomendaciones, tal como mencionaba en su último informe a la Comisión de Derechos Humanos, el Representante Especial realizó dos misiones a Rwanda, que tuvieron lugar del 8 al 15 de junio y del 31 de agosto al 7 de septiembre de 1998. Las fechas de las dos misiones se eligieron tras consultar con el Representante Permanente de Rwanda ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

5. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pudo destacar a la Administradora responsable de Rwanda para que acompañara y asistiera al Representante Especial durante su visita a Rwanda del 8 al 15 de junio. El Centro Danés para los Derechos

Humanos, a pesar del poco tiempo con que se le avisó, pudo destacar a uno de sus expertos en investigación y desarrollo de los derechos humanos, para que acompañara y asistiera al Representante Especial durante su visita a Rwanda del 31 de agosto al 7 de septiembre. La experta permaneció unos días más en Kigali para obtener más información antes de viajar a Ginebra para participar en la elaboración del informe. El Representante Especial está muy agradecido al Centro Danés para los Derechos Humanos por el apoyo que le prestó.

6. El Representante Especial estaba especialmente interesado en examinar, en colaboración con el Gobierno de Rwanda, los avances realizados en el establecimiento y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tras las conversaciones celebradas sobre este tema con todos los miembros del Gobierno durante sus visitas anteriores a Rwanda y que resumió en su informe a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1998/60, párr. 39).

7. El Representante Especial también estaba preocupado por los acontecimientos relacionados con la Operación de Derechos Humanos en Rwanda, de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y estaba especialmente interesado en averiguar si se podrían estudiar algunas iniciativas para mantener una presencia de la Operación de Derechos Humanos en Rwanda que fuera satisfactoria tanto para el Gobierno de ese país como para la Alta Comisionada.

8. El Representante Especial se reunió con altos funcionarios de la República de Rwanda, entre ellos el Presidente de la Asamblea Nacional de Transición, el Primer Ministro, el Ministro de Justicia, el Ministro de Cuestiones Relacionadas con la Mujer, la Familia y Asuntos Sociales, el Ministro de la Presidencia, el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Secretario General del Ministerio de Justicia, el Consejero Político del Vicepresidente y Ministro de Defensa, el Fiscal General Militar y el Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa.

9. El Representante Especial se reunió también con embajadores y jefes de misiones diplomáticas, entre ellos, el jefe de la delegación europea en Rwanda.

10. Asimismo, el Representante Especial se reunió con los jefes de los organismos de las Naciones Unidas, el Fiscal Adjunto del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja en Rwanda y los representantes de varias organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, entre ellas el Colectivo de Ligas y Asociaciones de Derechos Humanos.

11. El Representante Especial expresa su agradecimiento al Coordinador Residente de las Naciones Unidas y al Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para

el Desarrollo en Rwanda, quien le proporcionó toda la ayuda que necesitó durante su estancia en Rwanda. También desea expresar su gratitud a la oficial de derechos humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, quien le prestó una gran ayuda en la elaboración de este informe.

III. Observaciones

A. Retirada de la Operación de Derechos Humanos en Rwanda

12. A pesar de que el debate sobre la situación de la Operación de Derechos Humanos en Rwanda no está directamente incluida en su mandato, preocupan al Representante Especial algunos acontecimientos que podrían poner en tela de juicio la presencia de la Operación. En efecto, el 7 de mayo de 1998, el Gobierno de Rwanda había solicitado la suspensión de las actividades de la Operación hasta que se realizara un nuevo examen¹.

13. Tal como informó el Representante Especial a la Comisión de Derechos Humanos en febrero de 1998, las actividades de vigilancia de la Operación habían creado tensión en las relaciones con el Gobierno de Rwanda. En todas las reuniones con el Representante Especial, los funcionarios gubernamentales recordaron que la intención inicial del Gobierno había sido contar con la presencia en Rwanda de una operación de derechos humanos de las Naciones Unidas para fomentar la colaboración y ayudar a los rwandeses a desarrollar su capacidad para promover los derechos humanos, y no la de permitir la entrada de vigilantes que actuaran como “supervisores” de la acción del Gobierno. El Gobierno de Rwanda expresó su deseo de revisar el mandato de la Operación para que ésta hiciera más hincapié en la creación de capacidad, la cooperación técnica, la capacitación y la educación, teniendo en cuenta los progresos realizados en Rwanda desde 1994, en particular con el establecimiento de instituciones nacionales responsables de la promoción y la protección de los derechos humanos en el país.

14. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos también había propuesto una revisión del mandato de la Operación y apoyaba plenamente los deseos del Gobierno de fortalecer el componente de creación de capacidad de la Operación. En cuanto al componente de vigilancia, y tal como declaró en el informe que presentó a la Asamblea General en su quincuagésimo segundo período de sesiones (A/52/486/Add.1/Rev.1), la Alta Comisionada consideraba que la vigilancia debería concebirse como un medio para

ayudar al Gobierno a solucionar problemas, como una base para el diálogo a fin de diagnosticar las necesidades y una fuente de estímulo para que la comunidad internacional prestara la ayuda necesaria. El Representante Especial apoyó plenamente este enfoque.

15. Sobre la base de estas consideraciones legítimas y positivas expresadas tanto por el Gobierno de Rwanda como por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, el Representante Especial consideró que se podía llegar a un acuerdo sobre un mandato revisado de la Operación de Derechos Humanos en Rwanda. Por esta razón, durante su visita a Kigali a principios de junio de 1998 tomó la iniciativa de proponer al Gobierno de Rwanda y a la Alta Comisionada que ambas partes celebraran una reunión de alto nivel lo antes posible, para llegar a un entendimiento sobre el futuro de la Operación.

16. Tanto el Gobierno de Rwanda como la Alta Comisionada se mostraron favorables a esta propuesta y la Alta Comisionada envió a su Adjunto, el Sr. Enrique ter Horst, a Kigali el 13 de julio para negociar con una delegación rwandesa de alto nivel encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores, el Sr. Anastase Gasana, un nuevo acuerdo para una presencia de la Operación de Derechos Humanos en Rwanda. Las negociaciones entre ambas partes se desarrollaron en un clima de respeto mutuo y cooperación. Sin embargo, el Gobierno de Rwanda no aceptó que se atribuyeran competencias de vigilancia a una nueva operación de derechos humanos en Rwanda, a diferencia de lo que había propuesto la delegación de la Alta Comisionada.

17. Por lo tanto, las negociaciones finalizaron el 15 de julio sin que se llegara a ningún acuerdo y la Operación de Derechos Humanos se retiró de Rwanda el 28 de julio. El Representante Especial, junto con mucha gente en Rwanda, no puede sino lamentar profundamente que no se pudiera llegar a un acuerdo sobre el nuevo mandato para la presencia de la operación de derechos humanos.

18. En relación con la terminación de la Operación, el Gobierno de Rwanda esbozó un plan de derechos humanos de cinco puntos que presentó durante una conferencia de prensa celebrada el 23 de julio. El plan consiste en: a) capacitar a vigilantes nacionales de derechos humanos; b) iniciar programas curriculares y extracurriculares de educación sobre los derechos humanos; c) proporcionar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la asistencia financiera y técnica necesaria; d) lanzar una campaña de sensibilización de la población en materia de derechos humanos utilizando distintos medios; y e) establecer un centro nacional de derechos humanos que sirva de centro de información y de capacitación².

19. El Representante Especial espera sinceramente que la comunidad internacional apoye plenamente estas iniciativas del Gobierno de Rwanda. En particular, recomienda que se dote a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la estructura y los medios necesarios para desempeñar una función esencial en la promoción y la protección de los derechos humanos en Rwanda, tal como lo decidió el Gobierno de ese país y según lo estipulado en su Ley Fundamental.

B. Funcionamiento efectivo de una comisión nacional independiente de derechos humanos

20. El Representante Especial se felicita de la decisión de las autoridades rwandesas de establecer su propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, tal como lo estipula la Ley Fundamental de Rwanda. Las instituciones nacionales de derechos humanos pueden ser mecanismos eficaces para crear, a partir de los criterios internacionales sobre derechos humanos, una cultura nacional de respeto de los derechos humanos.

21. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se estableció por Orden Presidencial el 11 de noviembre de 1997. Sus siete miembros deberán ser nombrados por la Asamblea Nacional sobre la base de una lista de 10 candidatos presentados por el Gobierno. Tal como se indica en el informe del Representante Especial a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (E/CN.4/1998/60, párrs. 29 a 39), los ministros y funcionarios del Gobierno reconocieron la necesidad de que se abriera un debate completo y franco sobre el mandato y la composición de dicha Comisión, así como sobre los medios necesarios para garantizar su independencia y un amplio apoyo nacional a la misma. Sobre la base de estas consideraciones los ministros y funcionarios del Gobierno habían declarado que el Gobierno de Rwanda estaba de acuerdo con que se celebrara un debate completo y abierto sobre la Comisión en la Asamblea Nacional y había animado a esta última a adoptar las medidas necesarias para que se celebrara dicho debate. Los ministros también aseguraron al Representante Especial que las recomendaciones que él había presentado en noviembre de 1997 en sus "Comentarios sobre el anteproyecto del Gobierno de Rwanda con respecto a la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos" podrían ser examinadas entonces con todo detalle, y que el decreto podría modificarse según procediera antes de presentarlo para su aprobación como ley.

22. A este respecto, el Gobierno de Rwanda acogía con satisfacción y apoyaba la propuesta del Representante

Especial de organizar, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, un seminario público sobre este tema, con la participación de los miembros de la comisión recién designados, miembros de la Asamblea Nacional, de la sociedad civil de Rwanda y expertos regionales e internacionales. El Gobierno indicó al Representante Especial que las conclusiones de dicho seminario práctico se presentarían a la Asamblea Nacional y que el debate parlamentario podría dar lugar a la modificación del decreto presidencial, lo cual suponía la aprobación de una ley por parte de la Asamblea Nacional. Este proceso también fortalecería la aceptación de la Comisión Nacional por parte de todos los sectores de la sociedad, que la verían como una institución verdaderamente independiente al servicio de todo el pueblo de Rwanda.

23. Durante sus dos últimas visitas a Rwanda (a principios de junio y a principios de septiembre), los ministros y funcionarios del Gobierno aseguraron al Representante Especial que el proceso de establecimiento de una lista de 10 candidatos para su presentación a la Asamblea Nacional había prácticamente finalizado y que la lista estaba siendo revisada en la Oficina del Presidente. Este proceso se había alargado más de lo previsto porque el Gobierno no había escatimado esfuerzos para garantizar que los candidatos propuestos a la Asamblea Nacional fueran ampliamente respetados por su independencia y su integridad y reflejaran lo mejor posible la diversidad y los intereses del pueblo rwandés.

24. El Representante Especial apoya plenamente las preocupaciones del Gobierno a este respecto y subraya una vez más lo útil que sería organizar un seminario público, como se indica más arriba, inmediatamente después de que la Asamblea Nacional haya elegido a los miembros de la Comisión Nacional.

25. El Gobierno de Rwanda es muy consciente de la necesidad de avanzar para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda entrar en funcionamiento. El Gobierno volvió a asegurar al Representante Especial que se esforzaría al máximo por terminar este proceso lo antes posible.

26. Es evidente que estos avances tan positivos serán acogidos favorablemente por todos los agentes nacionales e internacionales que están trabajando en favor de Rwanda y facilitarán la decisión de la comunidad internacional de proporcionar la necesaria cooperación técnica y los recursos adecuados para el funcionamiento eficaz de esta institución nacional de derechos humanos.

C. Las condiciones de seguridad en Rwanda y sus efectos sobre la situación de los derechos humanos

27. En algunos países que limitan con Rwanda, las condiciones de seguridad se han deteriorado drásticamente, y esto tiene consecuencias directas para la seguridad en Rwanda. El Representante Especial reconoce las dificultades que enfrenta el Gobierno de Rwanda para reducir las violaciones de los derechos humanos, erradicar la impunidad y aplicar programas para implantar una cultura de los derechos humanos.

28. Durante el pasado año, grupos armados cometieron la mayoría de los incidentes que se comunicaron en Rwanda. Según los informes recibidos, estos incidentes se produjeron principalmente en la parte noroccidental de Rwanda, pero recientemente se han comunicado incidentes también en Rwanda central. Los ataques se han venido realizando con una alarmante impunidad; rara vez se capturó a los perpetradores y las víctimas sobrevivientes de los ataques con mucha frecuencia fueron despojadas de sus pertenencias. Los blancos principales de estos ataques fueron las oficinas comunales, las escuelas, los vehículos de transporte público y los centros de detención. La mayoría de los ataques se produjeron en asentamientos donde las víctimas principales fueron en su mayoría refugiados que habían regresado en 1959 desde el ex Zaire o Uganda (grupos de refugiados más antiguos), pero había también sobrevivientes del genocidio. Las autoridades locales y las personas que supuestamente habían proporcionado información al Ejército Patriótico Rwandés (EPA), o colaborado con éste, también fueron objeto de ataques.

29. Se tiene casi la certeza de que los grupos armados están compuestos de miembros de las milicias *interahamwe*, elementos del ex ejército (Forces Armées Rwandaises) y posiblemente miembros del ejército del ex Zaire. Se cree que también se han unido a la revuelta miembros de la población local, algunas veces cediendo a la coerción o a la fuerza. Muchos consideran que el levantamiento está dirigido por “extremistas” de las milicias *interahamwe* y que su objetivo es continuar el genocidio.

30. Por cierto, los métodos empleados en los ataques recientes se asemejan a los utilizados durante el genocidio. Tras los ataques en gran escala, durante los cuales se alentó u obligó a la población local a participar, las víctimas fueron mutiladas y los sobrevivientes presentaban lesiones similares a las observadas en los sobrevivientes del genocidio. Los atacantes no discriminaron en cuanto al objetivo de sus matanzas; no se perdonó la vida a mujeres, niños ni ancianos.

31. Durante el último año, los grupos armados han atacado a numerosos centros de detención, aparentemente para liberar a los detenidos. Estas confrontaciones con las fuerzas de seguridad con frecuencia resultaron en la muerte de los detenidos. En varios incidentes, los detenidos volvieron a los centros de detención por su propia voluntad, aparentemente porque temían por su seguridad física.

32. Desde octubre de 1997, la Operación ha comprobado un aumento de los ataques por grupos armados, tanto en frecuencia como en intensidad³. En respuesta a estos ataques, se ha incrementado la presencia militar en las prefecturas del noroeste. La mayoría de las violaciones del derecho a la vida cometidas por agentes del Estado se produjeron durante las actividades antisubversivas del Ejército Patriótico Rwandés y resultaron en la muerte de civiles desarmados. En algunos casos, parecía que las matanzas se perpetraban para castigar a elementos de la población que colaboraban con los grupos armados, o para disuadirlos de colaborar. También se comunicaron otras medidas antisubversivas, que resultaron en la privación de la libertad, el arresto y la detención arbitrarios, y posiblemente en desapariciones. El Representante Especial encomia los esfuerzos del ejército rwandés para prevenir y corregir esas violaciones. El fortalecimiento, en marzo de 1997, de la Oficina del Fiscal General Militar (Auditoriat Militaire) aumentó la capacidad del Ejército Patriótico Rwandés para realizar investigaciones internas y someter a juicio a los acusados. El Representante Especial expresa su satisfacción por las sentencias dictadas el año pasado por el Tribunal Militar, en virtud de las cuales se determinó la culpabilidad de soldados acusados de dar muerte a civiles, y se aplicaron sentencias.

33. El Representante Especial manifiesta su preocupación por las permanentes pérdidas de vidas de civiles. Se estima que desde 1996 han muerto varios miles de personas a raíz de este conflicto⁴, muchos de los cuales eran personas particularmente vulnerables, incluidos sobrevivientes del genocidio, mujeres, niños y ancianos. Los ataques contra civiles desarmados constituyen una violación del derecho internacional humanitario, en particular del artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. De conformidad con el derecho humanitario internacional, los no combatientes deben ser tratados con humanidad en todas las circunstancias, y todas las partes en el conflicto deben garantizar la protección de los civiles y la infraestructura esencial para la supervivencia de las poblaciones civiles.

34. La situación de la seguridad ha exacerbado las dificultades de la población rural, en particular en la región del noroeste. Muchas personas se han trasladado a lugares cercanos a puestos militares en busca de protección, creando asentamientos de personas desplazadas internamente sin ac-

ceso a sus tierras de cultivo. Se informa que la mayoría de los desplazados se encuentran en la prefectura de Ruhengeri. Fuentes gubernamentales comunicaron que al mes de septiembre de 1998 había 300.000 personas desplazadas en el país.

35. El Representante Especial felicita a todos los organismos de las Naciones Unidas presentes en Rwanda y elogia sus esfuerzos por ayudar al Gobierno de ese país a hacer frente a la situación de emergencia. El Representante Especial toma nota también de las actividades que realiza el Ejército Patriótico Rwandés para ayudar a las organizaciones internacionales a distribuir alimentos entre las poblaciones desplazadas. Esto ha permitido establecer un cierto grado de confianza entre el ejército y la población local.

36. En sus misiones a Rwanda, el Representante Especial observó un clima de creciente temor provocado por las tensiones existentes en la zona noroeste. Se creía que muchas matanzas obedecían a motivos étnicos, aunque resulta cada vez más difícil determinar la causa real de los asesinatos. Hay un conjunto cada vez más complejo de motivos que combinan crímenes pasados, frustración ante la falta de seguridad, conflictos por la propiedad de las tierras, robo y venganza personal. Para restablecer el imperio de la ley y sentar las bases de una sociedad justa, es preciso atender a los derechos de las víctimas.

37. El Representante Especial sigue preocupado por el número cada vez mayor de supuestas desapariciones. Muchos informes sobre personas desaparecidas provienen del noroeste, tras las operaciones de acordonamiento y registro realizadas por el Ejército Patriótico Rwandés. Algunas de estas personas han estado detenidas en prisiones o centros de detención militares sin que se informara de ello a sus familias.

38. Los informes sobre detenciones arbitrarias y posibles desapariciones aumentaron también en la zona del Gran Kigali, donde son cada vez más frecuentes las actividades de comprobación de la identidad que realizan el ejército y la policía.

39. La reciente evolución de la situación en la República Democrática del Congo, que afecta a toda la región de los Grandes Lagos, es motivo de creciente preocupación. La desviación de recursos escasos hacia los conflictos constituye una tragedia más en una región ya devastada por las repercusiones del genocidio de 1994. El Representante Especial apoya plenamente las declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en las que insta a los dirigentes regionales a procurar una solución pacífica del conflicto y pide a todas las partes que garanticen la protección de la población civil y respeten los derechos

humanos de todas las personas⁵. Particularmente alarmante es la persecución de individuos por razón de su origen étnico.

D. La situación del sistema judicial

40. El sector de la justicia sigue sumido en una crisis. Las estructuras actuales no son suficientes para resolver adecuadamente y en un plazo razonable las causas civiles y penales contra personas acusadas de genocidio. En principio, se ha establecido un sistema judicial viable, lo que constituye una importante mejora respecto de la situación existente hace cuatro años. Ahora bien, el sistema judicial sigue sufriendo a todos los niveles de falta de recursos, escasez de profesionales con calificaciones personales adecuadas y falta de equipo. La tendencia actual es asignar los recursos disponibles casi totalmente al enjuiciamiento de los participantes en el genocidio de 1994, en detrimento de otros aspectos de la justicia penal y civil, que siguen afectadas por una gran escasez de recursos humanos y materiales.

41. El Representante Especial se felicita complacido de los esfuerzos hechos por el Gobierno de Rwanda para resolver los problemas relacionados con la administración de justicia y de las medidas concretas que ha adoptado en esta esfera.

42. Una de las mejoras es el uso del procedimiento de confesión y admisión de culpabilidad. Este procedimiento, que fue establecido por la Ley sobre Genocidio de 1996, permite a ciertas personas acusadas confesar y declararse culpables a cambio de una reducción de la sentencia. Fuentes gubernamentales indicaron que, hasta la fecha, por lo menos 7.000 detenidos han manifestado su intención de acogerse a este procedimiento; en comparación, sólo 500 habían optado por este procedimiento en 1997, lo que había planteado dudas de que condujera efectivamente a una reducción importante del número de detenidos. Es probable que al facilitarse aún más el proceso, se lo invoque con más frecuencia. Si bien esta evolución es positiva a largo plazo, puede crear más presión sobre el ministerio público a corto plazo. Los detenidos que se declaran culpables pueden implicar a otros, haciendo necesaria una investigación y examen más a fondo de las pruebas.

43. Las oficinas del Ministerio Público (*parquets*) han sido reforzadas, en parte, gracias a la reciente capacitación y designación de 400 inspectores de la policía judicial en todo el país. Ahora bien, se podrían mejorar las aptitudes de estos inspectores mediante más actividades de capacitación, que podrían incluir la capacitación en normas de derechos humanos y metodologías de investigación.

44. El mejor funcionamiento de la Oficina del Fiscal Público y su mayor capacidad para atender nuevas causas ha

creado una mayor demanda en los tribunales. Se necesitan en particular más actividades de capacitación y el nombramiento de jueces para los tribunales de Primera Instancia (Juges de première instance) y secretarios judiciales (*greffiers*). El Gobierno de Rwanda está considerando estrategias alternativas para hacer frente al gran número de casos de genocidio, incluida la transferencia de casos de genocidio de ciertas categorías⁶ del Tribunal de Primera Instancia (Tribunaux de première instance) a los tribunales de distrito de nivel inferior (Tribunaux de canton) y al antiguo sistema de justicia comunal y tradicional, denominado *gachacha*. De aplicarse esta estrategia, habría que reconsiderar las necesidades de capacitación y creación de capacidad.

45. La Oficina del Fiscal General ha iniciado el proceso de “juicios en grupo”, en un intento por aliviar la carga de trabajo del sistema judicial. El primero de esos juicios se inició el 27 de febrero y se terminó el 5 de junio de 1998. La Cámara Especial del Tribunal de Primera Instancia de Byumba juzgó en un solo caso a 51 personas acusadas de participar en diverso grado en el genocidio. Esto permitió al Fiscal determinar claramente los hechos y el grado de participación de cada acusado. Si bien hay que preservar la naturaleza individual del proceso judicial, las organizaciones de derechos humanos consideran que este enfoque, utilizado con prudencia, puede dar lugar al enjuiciamiento rápido y más coherente de las personas acusadas de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

46. El Representante Especial toma nota del establecimiento de un Bureau de consultation et de défense en la Asociación de Abogados de Rwanda y considera que es un paso positivo para asegurar la representación jurídica de todas las partes en las causas penales y civiles. Ha aumentado el número de casos de genocidio en que el acusado tuvo acceso a asesoramiento jurídico, proporcionado en su mayor parte por la organización no gubernamental internacional con sede en Bélgica Avocats sans Frontières (ASF). El Centro de Derechos Humanos ha iniciado programas para capacitar y habilitar a defensores judiciales rwandeses para los juicios de genocidio. Si bien en general ha habido progresos en la representación judicial para la defensa en los juicios de genocidio, la distribución de esta representación no ha sido equilibrada. En razón de las condiciones de seguridad, la entidad ASF no opera en las prefecturas de Ruhengeri, Gisenyi, o Kibuye. Muchos abogados rwandeses también son reticentes a aceptar casos en esas prefecturas.

47. Casi la mitad de todas las partes civiles tuvieron representación jurídica durante el primer trimestre de 1998, lo que constituye una mejora respecto del año anterior. La representación jurídica fue proporcionada, en parte, por

la Asociación de Abogados en Rwanda, y en parte, por abogados extranjeros.

48. En cuanto a la independencia de la judicatura, el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la independencia de magistrados y abogados señaló en su último informe:

“La situación política que prevalece en Rwanda ha hecho difícil el funcionamiento efectivo de un sistema judicial independiente e imparcial. La falta de recursos, tanto financieros como humanos, es motivo de gran preocupación.”(E/CN.4/1998/39)

A la luz de otros casos que se han señalado a la atención del Representante Especial, incluida la suspensión del Presidente de la *Cour de Cassation* el 22 de marzo, hay que destacar que la independencia de la judicatura es un requisito previo fundamental para erradicar la impunidad y mantener el imperio de la ley en cualquier país. El Representante Especial insta enérgicamente al Gobierno de Rwanda a que no escatime esfuerzos para asegurar y preservar la independencia de la judicatura.

49. El Representante Especial encomia los dictámenes del Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Espera que estos veredictos constituyan el primer paso en el camino hacia la erradicación de la impunidad. El 2 de septiembre de 1998, el Tribunal juzgó a Jean-Paul Akayesu, ex alcalde de distrito (*bourgmestre*) de la comuna de Taba, prefectura de Gitarama, culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinatos, torturas y violaciones. Esta es la primera interpretación que hace un tribunal internacional de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. El 4 de septiembre de 1998, el ex Primer Ministro de Rwanda, Jean Kambanda, fue sentenciado a prisión perpetua por su participación en el genocidio de 1994. Kambanda recibió la pena máxima del Tribunal Penal Internacional, pese a su declaración de culpabilidad, en razón del grado de responsabilidad y la gravedad de sus crímenes.

E. La situación del sistema penitenciario

50. Se estimaba que al mes de septiembre de 1998 había 125.000 personas en los centros de detención de todo el país⁷. Esto representa una ligera disminución respecto de la cifra del final de 1997. El número menor de personas detenidas representa, por primera vez, una evolución positiva en la situación de los detenidos. Asimismo, la tasa de nuevas detenciones se ha reducido significativamente en comparación con 1997. No obstante, muchas de las personas que anteriormente se encontraban en los centros de detención comunales (*cachots*) fueron trasladadas a cárceles centrales, lo que provocó situaciones de hacinamiento y sobrecarga en las cárceles.

51. Se ha observado un marcado aumento en el número de personas liberadas por razones humanitarias (los ancianos, los enfermos graves y los menores) y por falta de pruebas suficientes para justificar el enjuiciamiento. Se ha señalado que pese a varios incidentes de violencia contra los liberados, en general la población está dispuesta a aceptar el regreso de las personas liberadas a la comunidad. El Representante Especial desea destacar la necesidad de adoptar medidas adecuadas para garantizar su seguridad y facilitar su reintegración a la sociedad.

52. El número total de detenidos en centros de detención comunales y militares se ha reducido de unos 50.000 al final de 1997 a aproximadamente 40.000 en septiembre de 1998. Hay varias razones que explican esta reducción. La principal es la transferencia masiva de detenidos de los *cachots* comunales a las cárceles centrales. La reducción de la población de detenidos comunales, junto con los esfuerzos por mejorar las condiciones en los *cachots* más precarios, ha dado lugar a un mejoramiento a las condiciones de detención en muchos centros comunales. Con todo, los progresos no han sido uniformes: en algunas prefecturas se observan grandes progresos mientras que en otras regiones las condiciones son penosas.

53. La población de la cárcel central ha llegado a una cima de 84.000 detenidos, en comparación con 70.000 al final de 1997, debido sobre todo al traslado masivo de detenidos desde los *cachots* comunales. La capacidad general de las cárceles de Rwanda asciende a menos de la mitad del número real de detenidos. Las condiciones de gran hacinamiento se han aliviado sólo parcialmente con el aumento de la capacidad de las cárceles y la ejecución de programas de trabajos supervisados, que permite a los detenidos salir de la cárcel durante algunas horas del día.

54. Los centros de detención tienen poblaciones que exceden su capacidad nominal y se caracterizan por falta de

alimentos y agua, ventilación e iluminación deficientes y falta de instalaciones sanitarias. Estas condiciones deplorables, combinadas con un gran hacinamiento y períodos excesivos de encarcelamiento (muchas personas han estado detenidas hasta cuatro años sin juicio) han provocado un aumento de las enfermedades (como la tuberculosis) y de las tasas de mortalidad generales de las cárceles.

55. El Representante Especial está sumamente preocupado por las condiciones prevalecientes en los centros de detención de Rwanda y pide a la comunidad internacional que ayude al gobierno de ese país a encontrar soluciones inmediatas y a largo plazo.

F. Factores económicos y sociales

56. Las necesidades de Rwanda están cambiando gradualmente, de la asistencia inmediata de emergencia para hacer frente a las consecuencias del genocidio de 1994, a una cooperación a más largo plazo para el desarrollo y la creación de capacidad. Las mujeres y los niños, en particular, han sufrido los efectos del genocidio. Su situación sólo se puede aliviar mediante actividades concertadas a largo plazo que requieren una mayor atención a la función de la sociedad civil para promover y asegurar una cultura de respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley. En particular, es imperativo prestar apoyo a las organizaciones no gubernamentales que actúan en la esfera de los derechos humanos.

57. Las estadísticas reflejan un efecto negativo persistente del genocidio sobre los indicadores sociales, lo que apunta a la necesidad de superar dificultades en las actividades de reconstrucción. La expectativa de vida se ha reducido en 4,5 años desde 1991, las muertes por cada 1.000 nacidos vivos aumentaron de 87 en 1991 a 131 en 1998, y el número de madres que mueren durante el alumbramiento aumentó casi cuatro veces en el mismo período⁸.

58. La situación de las mujeres de Rwanda sigue siendo particularmente precaria. Las repercusiones del genocidio han exacerbado en casi todos los sectores las desigualdades tradicionales entre hombres y mujeres. En 1996 el 40% de todos los hogares estaban encabezados por mujeres, en comparación con el 25% en 1991. Esto refleja, en parte, el gran número de familias afectadas por las detenciones o por el genocidio y el conflicto armado. La tasa de alfabetización de las mujeres es inferior al 50%; la mayoría de las mujeres que están a cargo del hogar prácticamente no tienen educación y sólo el 25% de todos los estudiantes de los centros de educación superior son mujeres⁹.

59. Un gran número de mujeres sigue sufriendo las consecuencias traumáticas de los actos de violencia sexual cometi-

dos durante el genocidio. Las víctimas de las violaciones son expulsadas de sus comunidades y hay manifestaciones de prejuicio extremo contra las que buscan ayuda. Las víctimas de la violencia sexual suelen ser también víctimas de violencia no sexual; muchas mujeres violadas durante el genocidio de Rwanda han perdido a sus maridos y otros miembros de sus familias, y no cuentan con estructuras sociales de apoyo. El Representante Especial desea recordar una vez más las recomendaciones de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer en su último informe sobre Rwanda. Estas recomendaciones se refieren al enjuiciamiento de los perpetradores de violencia sexual y al suministro de asistencia específica para mujeres víctimas de la violencia, incluidas las actividades generadoras de ingresos, la atención médica y la asistencia social¹⁰.

60. La sentencia dictada contra el ex alcalde de distrito de la comuna de Taba, Jean-Paul Akayesu, es un primer paso en el reconocimiento de la extensión de la violencia sexual contra la mujer. La decisión del Tribunal Penal Internacional para Rwanda reconoce que la violencia sexual forma parte del genocidio perpetrado en Rwanda.

61. El Representante Especial tiene conocimiento de la situación vulnerable de los niños en las sociedades que han pasado por un período de genocidio. Recuerda las obligaciones del Estado de proteger los derechos del niño en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, que Rwanda ha ratificado. El Gobierno de Rwanda ha cooperado con el UNICEF y otros organismos para dar prioridad a los casos de menores acusados de genocidio que actualmente están detenidos. Se ha impartido capacitación especializada a jueces e investigadores judiciales respecto de la tramitación de estos casos. Se ha avanzado lentamente en el suministro de abogados defensores para menores acusados en virtud de las leyes de genocidio; por otro lado, el número de niños menores de 14 años detenidos en las cárceles se ha reducido drásticamente. El Gobierno procura también separar a los menores de los adultos en las cárceles; otros menores han sido puestos en libertad bajo palabra o transferidos a centros de reeducación. No obstante, se siguen comunicando incidentes de violencia sexual y prostitución entre los menores detenidos.

62. La fortaleza de la sociedad civil será un indicador clave de la promoción y el respeto de los derechos humanos. Las organizaciones no gubernamentales nacionales siguen necesitando asistencia para la creación de capacidad, particularmente capacitación básica, logística y asistencia material. Muchas de estas organizaciones carecen de mecanismos eficaces para establecer una cooperación colectiva y están divididas en razón de la posición que ocupan frente a los diferentes grupos sociales y afiliaciones políticas.

63. La retirada de la Operación significó también la pérdida de un asociado importante de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de los derechos humanos. La cooperación entre estas organizaciones y los asociados internacionales debe seguir formando parte de un programa amplio.

64. La creación de grupos de la sociedad civil, y la cooperación de estos grupos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando ésta pase a la fase operacional, será un aspecto fundamental del proceso de reconstrucción que se está llevando a cabo en Rwanda.

IV. Conclusiones y recomendaciones

65. El objeto del presente informe es ayudar al Gobierno de Rwanda en sus esfuerzos por promover y proteger los derechos humanos. El Representante Especial abraza la esperanza de que la presentación de un informe transparente sobre la evolución de la situación en Rwanda ayudará al Gobierno de ese país y a la comunidad internacional a incrementar la cooperación en la esfera de los derechos humanos.

66. El Representante Especial expresa su reconocimiento por las contribuciones de la Operación de Derechos Humanos en Rwanda de las Naciones Unidas a la promoción y la protección de los derechos humanos en Rwanda. El personal ha dado muestras de dedicación a los principios y al trabajo durante los últimos cuatro años, a menudo en circunstancias difíciles. El Representante Especial agradece particularmente la asistencia de la Operación durante sus primeras misiones en Rwanda.

67. En su informe a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1998/60), el Representante Especial presentó al Gobierno de Rwanda varias recomendaciones basadas en los resultados de sus primeras misiones. Estas recomendaciones básicas siguen teniendo validez, pero desde ese momento se han producido varios acontecimientos importantes. A fin de tener en cuenta estas novedades y otras conversaciones que celebró durante sus misiones de principios de junio y principios de septiembre, el Representante Especial presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones principales.

68. Dadas las circunstancias prevalecientes, es ahora sumamente importante que el Gobierno de Rwanda y la comunidad internacional incrementen su cooperación para mantener y desarrollar las condiciones más favorables posibles para la promoción y protección de los derechos humanos en Rwanda.

69. A este respecto, el Representante Especial insta al Gobierno de Rwanda y a la Asamblea Nacional de Rwanda a que adopten medidas apropiadas para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada por decreto presidencial del 11 de noviembre de 1997, se establezca y comience a funcionar efectivamente y en forma independiente, de conformidad con la ley fundamental de Rwanda.

70. El Representante Especial pide a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que preste todo el apoyo necesario a la organización de un seminario público sobre la recientemente establecida Comisión Nacional de Derechos Humanos, una vez que la Asamblea Nacional haya elegido a sus miembros de entre los candidatos de una lista presentada por el Gobierno. Participarían en este seminario los miembros recientemente nombrado de la Comisión, miembros de la Asamblea Nacional, miembros de la sociedad civil de Rwanda y expertos regionales e internacionales. Las conclusiones de este seminario se presentarían a la Asamblea Nacional a los fines de un debate parlamentario que podría facilitar la aprobación de una ley para seguir fortaleciendo el funcionamiento, el mandato y la independencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

71. El Representante Especial insta a la comunidad internacional a que preste toda la cooperación técnica necesaria y aporte recursos apropiados para apoyar el funcionamiento efectivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

72. El Representante Especial reconoce que si bien ya se han establecido las estructuras fundamentales del sistema de justicia militar y civil, hay todavía una necesidad apremiante de que la comunidad internacional realice esfuerzos coordinados para resolver satisfactoriamente las enormes dificultades que todavía afectan al sistema judicial de Rwanda. Para implantar definitivamente el imperio de la ley, se necesita un marco estratégico creado en asociación con el Gobierno de Rwanda, que tenga objetivos claramente identificados.

73. El Representante Especial reconoce que las actividades realizadas por el Gobierno para acelerar las etapas iniciales del enjuiciamiento han dado resultados positivos, como lo demuestra el número cada vez mayor de personas acusadas que han manifestado su voluntad de utilizar el procedimiento de confesión y declaración de culpabilidad. Esto, a su vez, subraya la necesidad de impartir una mejor capacitación a los inspectores de policía en materia de normas de derechos humanos y técnicas de investigación. Al mismo tiempo, se debe capacitar y nombrar a nuevos jueces y oficiales judiciales.

74. El Representante Especial acoge con beneplácito la liberación, por motivos humanitarios, de personas detenidas

y toma nota de las mejores condiciones imperantes en varios *cachots*. El Representante Especial abraza la esperanza de que en breve se adopten medidas adecuadas para facilitar la reintegración en la sociedad de las personas liberadas. Ahora bien, sigue siendo motivo de gran preocupación el gran hacinamiento y el aumento de la tasa de la mortalidad en las cárceles. El Representante Especial insta al Gobierno de Rwanda y a la comunidad internacional a que continúen sus esfuerzos para mejorar las condiciones de la detención y apliquen rápidamente soluciones adecuadas para reducir el número de personas detenidas.

75. Los hechos de genocidio y sus consecuencias deben ser adecuadamente documentados, a fin de facilitar el proceso de reconciliación nacional. La comunidad internacional debe establecer, con carácter prioritario, programas para resolver los problemas de los supervivientes del genocidio.

76. El Representante Especial elogia los veredictos del Tribunal Penal Internacional para Rwanda y espera que las sentencias faciliten el proceso de reconciliación nacional. El Representante Especial insta a la comunidad internacional a que siga prestando apoyo y cooperación al Tribunal.

77. El Representante Especial exhorta a la comunidad internacional a que condene enérgicamente y de manera inequívoca a las fuerzas de la insurrección, que se han mostrado dispuestas a reanudar el programa de genocidio iniciado en 1994, desestabilizando los esfuerzos por implantar la paz y la seguridad en Rwanda y saboteando las actividades del Gobierno para fomentar la reconciliación nacional.

78. El Representante Especial alienta encarecidamente y apoya al Gobierno en sus esfuerzos por sancionar las violaciones cometidas por algunos elementos de sus fuerzas armadas.

79. El Representante Especial pone nuevamente de relieve las recomendaciones de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer. A este respecto, insta a los tribunales de Rwanda a que adopten medidas concretas para asegurar la aplicación de medidas adecuadas de prevención, investigación y reparación civil y penal, incluido el pago de indemnizaciones a las víctimas. Se debe dar mayor difusión a los programas de asistencia social para las mujeres víctimas de la violencia, incluidas las actividades generadoras de ingresos, los subsidios de educación y la atención médica.

80. El Representante Especial pone de relieve la situación vulnerable de los niños, y pide a la comunidad internacional que preste asistencia a Rwanda para asegurar que los niños supervivientes del genocidio reciban tratamiento traumatológico apropiado y que todos los niños tengan acceso a la educación. El Representante Especial apoya los esfuerzos que realiza el sistema judicial de Rwanda para tramitar rápida-

mente los casos de menores acusados de genocidio y por tener en cuenta, especialmente, su edad y otras circunstancias especiales.

81. La sociedad civil, en particular los grupos de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales nacionales, cumplen una importante función en la reconstrucción del sistema judicial y el establecimiento del imperio de la ley en Rwanda. Esta función se verá facilitada cuando funcione efectivamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, el Representante Especial agradece los esfuerzos del Gobierno por incluir a representantes de los diversos elementos de la sociedad civil en su campaña para promover una cultura de derechos humanos en Rwanda, basada también en las tradiciones del país. El Representante Especial alienta a los asociados de Rwanda a que presten apoyo financiero y asistencia técnica a las organizaciones y grupos de derechos humanos de Rwanda.

82. El Representante Especial pide a la comunidad internacional que preste atención a la alarmante evolución de la situación en esta región, particularmente a la escalación de la violencia. Si no se adoptan medidas, se podrían perder muchas vidas en conflictos raciales. Se necesita con urgencia una intervención decisiva de la comunidad internacional para asegurar la protección de las víctimas y condenar la incitación al odio racial.

83. El Representante Especial alienta al Gobierno de Rwanda a cumplir sus obligaciones de presentación de informes en relación con las convenciones internacionales de derechos humanos que Rwanda ha ratificado.

84. Por último, el Representante Especial pide a los asociados de Rwanda que inicien un programa integrado y amplio de asistencia para apoyar los esfuerzos que realiza el Gobierno de ese país para promover y proteger los derechos humanos fundamentales y velar por el bienestar del pueblo de Rwanda en condiciones de paz y seguridad.

conservadora de 15.0000 muertos por mes desde principios de 1997.

⁵ Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 7 de agosto de 1998.

⁶ Las personas acusadas de crímenes de genocidio se agrupan en cuatro categorías. En la categoría 1 figuran los organizadores, planificadores o instigadores del genocidio. Las personas que ocupaban cargos con facultades de decisión, los criminales conocidos o los que cometieron actos de tortura sexual figuran también en la primera categoría. En la categoría 2 figuran las personas que cometieron homicidio intencional. La categoría 3 comprende a las personas que cometieron asaltos graves que provocaron la muerte de las víctimas; y la categoría 4 reúne a las personas que cometieron delitos contra la propiedad.

⁷ Las cifras fueron suministradas por el Comité Internacional de la Cruz Roja en Rwanda.

⁸ Fuente: World Bank Poverty Update, 1998.

⁹ Estadísticas suministradas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Rwanda.

¹⁰ Véanse las recomendaciones de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, en el informe de su misión a Rwanda (E/CN.4/1998/54/Add.1). Véanse también las recomendaciones de la Relatora Especial de la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos, en su informe sobre la violación sistemática (E/CN.4/Sub.2/1998/13).

Notas

¹ Véase un resumen de las actividades de la Operación y el proceso de examen en el informe de la Alta Comisionada a la Asamblea General (A/53/367).

² Conferencias de prensa de Anastase Gasana, Ministro de Relaciones Exteriores, Kigali, 23 de julio de 1998.

³ Hay más información sobre la situación de los derechos humanos en Rwanda en el informe de la Alta Comisionada a la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1998/61), correspondiente al período comprendido entre marzo y diciembre de 1997.

⁴ El vocero del Comité Internacional de la Cruz Roja estimó un promedio de 1.000 muertos por mes en el verano de 1997. La Operación comunicó un deterioro de la situación desde octubre de 1997. Esto daría una estimación